

Violencia institucionalizada

Araceli Damián*

La violencia se ha convertido en el signo más emblemático y preocupante del supuesto proyecto modernizador iniciado desde el sexenio de Miguel de la Madrid (1982-1988). México vive en un marasmo económico que se combina con el deterioro de los salarios, la falta de creación de empleos y el aumento en la concentración del ingreso y la riqueza en nuestro país. La cercanía a los Estados Unidos, principal consumidor de drogas en el mundo, y la negativa para legalizar su consumo han provocado que México se convierta en el campo de batalla de los cárteles de la droga.

La espeluznante matanza de jóvenes, el reciente asesinato de trabajadores y trabajadoras en Ciudad Juárez y el ataque de la policía federal a estudiantes que se manifestaban contra la violencia no parecen conmover al gobierno ni a las élites que siguen acumulando riqueza y emprenden guerras intestinas entre ellos para tratar de quedarse con la tajada más grande de la riqueza nacional, como lo muestra la pelea en tribunales de la concesión que otorgara la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en particular su secretario Juan Molinar, originalmente a Televisa (asociada con Nextel aunque después declinara), empresa que hizo “socios” a sus trabajadores con el fin de quitarles prestaciones laborales. Al convertirse en pobres accionistas, choferes, camarógrafos, técnicos, entre otros trabajadores tienen que laborar largas jornadas sin prestaciones, solo por poner un ejemplo de las acciones emprendidas por los poderes fácticos de país.

Vivir en Juárez es jugarse la vida. Pero esta situación se ha generalizando a lo largo y ancho del país. Cada día se vuelve más cierta la frase de Carlos Monsivais “todos somos Juárez”. Pero la violencia no es nueva, sino que ha tomado un carácter explosivo. Esta violencia que tanto lacera es el resultado de la ejercida por el gobierno y las élites, que han mantenido en el desempleo, la inestabilidad laboral y con salarios de hambre a los trabajadores y a sus familias. Lo que vivimos ahora son los daños colaterales de la violencia institucionalizada.

Hace unas semanas Clara Jusidman, integrante de Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social A.C. (INCIDE Social) presentó en el XI Seminario Nacional de Política Social, el trabajo de investigación que coordinó para la Comisión Nacional para la Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM) de la Secretaría de Gobernación, en el cual la autora y su equipo estudian los factores precursores, de riesgo y detonadores de la violencia social y de género en seis ciudades mexicanas en 2009.

De acuerdo con la presentación que hizo del trabajo se presupuso que la violencia es resultado de “procesos que se van generando e interrelacionando de manera tal que se crean situaciones y ambientes propicios que ante condiciones especiales o excepcionales, pueden desatar agresiones de pequeña escala, generalizadas, o fuera de lo normal, que atentan contra la dignidad, la integridad, la vida y la propiedad de las personas.”

Jusidman identificó tres principales precursores de la violencia: 1) liberalización del mercado de la tierra que inició en 1982; 2) la flexibilización del mercado laboral; y 3) la apertura al mercado de servicios antes públicos. Es claro pues que estas acciones fueron impulsadas por el gobierno y, que por tanto, se constituyen en precursores institucionalizados de violencia.

En cuanto al primero planteó que la venta o la posibilidad de ceder tierras ejidales hicieron más caótico el crecimiento de las ciudades, ya que se dio a la par de la flexibilización de la planeación urbana, lo que tuvo consecuencias negativas para las condiciones de habitabilidad. Esto se agudizó con Vicente Fox (2000-2006) debido a que la construcción masiva de vivienda de “interés social” se hizo con un diseño horizontal, de dimensiones minúsculas (incluso de 27 metros cuadrados) y en zonas carentes de servicios educativos, recreativos, culturales y de transporte, desvinculadas de las ciudades cercanas. Se dio una fuerte segmentación del territorio entre zonas abastecidas y carentes de servicios.

Se marcaron claramente las zonas dormitorio, destinadas para los pobres. Los largos trayectos de ida y vuelta al trabajo resultantes de esta forma de urbanización han dificultado el cuidado de menores en el hogar, con lo cual las familias se enfrentan a la disyuntiva de dejar solos a los niños (con las

consecuentes repercusiones en los sentimientos de abandono y la posibilidad de ser víctimas o enganchados por la delincuencia), o de fragmentarse, dejando a los menores al cuidado de familiares. En las zonas más céntricas el mayor problema encontrado fue la existencia de terrenos baldíos que sirven de refugio a bandas delictivas.

La flexibilización del mercado laboral es otro de los grandes precursores de violencia, debido a que los trabajadores quedaron desprotegidos, sin posibilidad de sindicalizarse, y por tanto sin poder frenar los abusos de empleadores, padeciendo bajos salarios y pésimas condiciones de vida. Finalmente, Jusidman expuso algunos de los problemas de la privatización de los servicios en donde encontramos una multiplicación de establecimientos privados que ofrecen el cuidado de menores, sin que exista supervisión de la calidad del servicio, situación que quedó de manifiesto con la tragedia de la guardería ABC en Hermosillo.

No hay lógica en el funcionamiento económico de este país. La baja salarial ha provocado una reducción del mercado interno, los empresarios dedicados a producir bienes y servicios para éste no tienen posibilidad de crecer. Somos una de las economías más vulnerables a las crisis internacionales y altamente dependientes de los vaivenes económicos de Estados Unidos. ¿Acaso no es tiempo ya de que el gobierno y las élites acepten que se necesita desarrollar una alternativa económica a la actual, que incluya la mejora salarial y mayores oportunidades de empleo como eje reestructurador? De lo contrario seguiremos todos viviendo en Juárez.

*El Colegio de México, adamian@colmex.mx,